

Imprimir

La captura del presidente Maduro y la guerra contra Irán fueron concebidas por la administración de Donald Trump como dos etapas de un plan que tiene como objetivos decapitar los respectivos regímenes y apoderarse de la primera y de la tercera reserva mundial de petróleo y gas del planeta. La aparente facilidad con la que realizó la primera etapa de este plan acrecentó enormemente el optimismo con el que Trump y Netanyahu decidieron, en una reunión celebrada el 28 de enero del año pasado en Mar-a-Lago, reanudar la guerra de agresión contra el país persa. Convencidos de que el éxito de la operación relámpago de comandos que permitió el secuestro el 3 de enero pasado del presidente Maduro y de su esposa Cilia Flórez, había logrado poner de rodillas a Venezuela, creyeron que en Irán sucedería lo mismo.

De allí que, a pesar de las advertencias de sus asesores militares más realistas, aprobaron el plan de “decapitación del régimen iraní” desencadenado el 28 de febrero pasado. En la madrugada de ese día y sin previo aviso, atacaron: mataron a Alí Jameneí, el líder supremo, a ministros y a importantes mandos militares, al tiempo que bombardeaban masivamente instalaciones militares e infraestructuras civiles. Creyeron que este golpe “choque y pavor” pondría a Irán de rodillas. Esperaban que pocos días después, las mayorías populares habrían derrocado al gobierno de la república, habrían recibido con vítores a las tropas estadounidenses e israelíes y aclamado a Reza Pahlavi como el nuevo sha de Persia. República islámica kaput.

Por eso tampoco escucharon a quienes les advertían que desencadenar la guerra en el Golfo Pérsico, dispararía los precios del gas y del petróleo en todo el mundo, incrementado la inflación en los propios Estados Unidos hasta convertirla en intolerable y desencadenando una crisis económica de proporciones mayúsculas. Calcularon, si eso es calcular, que, si el problema se resolvía en una semana o poco más, los precios de los hidrocarburos, en caso de que hubieran subido, volverían a bajar hasta niveles previos al ataque.

A tres semanas largas del inicio de esta agresión absolutamente injustificada, está meridianamente claro que todos cálculos y todas las previsiones de Trump y Netanyahu se ha ido por el desaguadero y con ella la realidad ilusoria, generada por sus declaraciones

amplificadas y multiplicadas por los medios del Occidente colectivo. Incluidos, los que en este país nos intoxican diariamente con información adulterada. Irán sigue en pie, las bases militares estadounidenses en la región están destruidas o fuera de servicio, e Israel soporta un día sí y otro también el bombardeo inclemente de los misiles de Irán y de Hezbollah. No hay que ser siquiera un analista geopolítico del montón, como soy yo, para darse cuenta de que desencadenar una guerra en la gasolinera del mundo es la peor idea que se le puede ocurrir a un líder político, y peor aún si ese líder es el comandante en jefe de las fuerzas armadas de Estados Unidos de América. Cada bomba lanzada, cada misil disparado, con independencia del bando que lo dispare aviva un fuego que terminará quemando a todos.

Metáforas aparte, el hecho es que este incendio no solo pone en jaque a Estados Unidos y a la propia presidencia de Trump. Los efectos negativos del mismo se sienten en todo el mundo. En el plano económico desde luego. Los precios del gas, del petróleo, de los fertilizantes siguen subiendo a pesar de todos los esfuerzos de Trump por mantenerlos a la baja, declarando un día que la guerra ha terminado, otro que todas las capacidades militares de Irán han sido destruidas, el siguiente que en 48 horas abrirá por la fuerza el Estrecho de Ormuz, y ayer mismo que está a punto de llegar a un acuerdo con el gobierno de Irán. Todas ellas, desmentidas por las declaraciones iraníes y por los hechos sobre el terreno. Es lo que pasa cuando te crees tus propias mentiras.

Pero la guerra contra Irán está teniendo enormes consecuencias políticas a escala planetaria. Hoy me ocupo de las que afectan a Venezuela. El éxito del operativo que permitió el secuestro del presidente Maduro y de su esposa, obligó al gobierno venezolano a hacer concesiones a Estados Unidos. Y no por el secuestro en sí, suficientemente grave, sino porque él mismo supuso un agravamiento de la operación *Lanza del Sur*. El plan de agresión a Venezuela, que se inició con el bloqueo marítimo del país hermano por una formidable armada estadounidense, cuyo buque insignia era el portaaviones de propulsión nuclear *Gerald Ford*, autoproclamado como el más avanzado y poderoso del mundo. Bloqueo que se dedicó primero a bombardear sin contemplaciones lanchas acusadas de estar al servicio de “narcoterroristas”, para después asaltar y confiscar petroleros que salieran o llegaran a Venezuela. Ni China ni Rusia, aparte de protestar, hicieron nada efectivo para

romper dicho bloqueo. Y resultaba evidente que ni la marina ni la aviación de la república bolivariana, dada su debilidad relativa, tenían la más mínima posibilidad de romperlo. Por lo que, en caso de prolongarse el bloqueo, Venezuela quedaba expuesta a repetir el escenario adverso padecido durante la primera presidencia de Donald Trump. Cuando las sanciones impuestas por él, incluida expulsión del Venezuela del sistema de pagos internacionales dominado por el dólar, impidieron que Venezuela exportara su petróleo. Así fue como de producir 3 millones de barriles diarios de petróleo pasó a producir sólo 200.000. Una catástrofe económica y social.

Además, no se podía descartar que el secuestro del presidente Maduro fuera seguido de una campaña de bombardeos aéreos de Caracas y de las principales ciudades del país con vistas a destruir infraestructuras críticas y aterrorizar a la población, tal y como ahora mismo Estados Unidos e Israel están haciendo en Irán. Ni tampoco que dichos bombardeos estuvieran acompañados por un desembarco de marines en el golfo de Maracaibo para controlar las instalaciones petroleras, secundado por una ofensiva terrestre del ejército colombiano, que había concentrado tropas en el Catatumbo para combatir a un frente del ELN, al que se acusaba de tener su santuario en Venezuela. Colombia, por su parte, acababa de ultimar la compra de 17 cazas Gripen a Brasil, aviones más aptos para las guerras internacionales que para la lucha contrainsurgente. *And last but not least:* Colombia alberga 7 bases militares de “uso compartido” con las fuerzas armadas estadounidenses.

La dirigencia socialista venezolana evaluó el conjunto de la situación y decidió hacer concesiones importantes a cambio de obtener el reconocimiento por la administración de Donald Trump del gobierno encabezado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el respeto a las instituciones propias de la república bolivariana, definidas y construidas bajo el liderazgo del comandante Hugo Chavez.

A partir de estos hechos, el gobierno de Delcy Rodríguez ha hecho una serie de concesiones, las más importantes, la nueva Ley de Hidrocarburos, que abre las puertas a las inversiones estadounidenses en la industria petrolera, y la Ley de Amnistía, que beneficia a los líderes opositores condenados y encarcelados. Y tomado otras decisiones de gran importancia: la

reapertura de las respectivas embajadas en Caracas y Washington y la que tiene una importancia estratégica aún mayor: renovación de las cúpulas judicial y militar. Cuyo alcance y significado políticos ahora mismo no soy capaz de evaluar, pero que en los próximos meses inevitablemente se habrá de aclarar en función de las negociaciones que está manteniendo Delcy Rodríguez con los representantes de la administración Trump.

Para quienes las concesiones hechas no son suficientes, porque ellos quieren aumentarlas y profundizarlas. Ellos quieren que el petróleo venezolano se comercie exclusivamente en dólares, que Venezuela impida a las empresas chinas y rusas que se beneficien de la nueva Ley de Hidrocarburos, que desconozca las deudas contraídas por Venezuela con China y Rusia y que anule el plan de inversiones estrategias de China en la reconstrucción y renovación de la industria de hidrocarburos de Venezuela. Además, quisieran que la cúpula del poder judicial fuese proclive a satisfacer sus demandas políticas y económicas. Y que la nueva cúpula militar adopte una estrategia de desmantelamiento político e ideológico de las fuerzas armadas bolivarianas que permita su reemplazo por unas fuerzas armadas controladas orgánica, política e ideológicamente por el Comando Sur.

Estos son los desafíos que actualmente enfrentan el pueblo, el gobierno y la dirigencia socialista venezolana. De nuevo me declaro incapaz de anticipar cómo y en qué términos lo harán. De lo que sí estoy completamente seguro es que lo harán en una coyuntura en la que el fracaso de su guerra de agresión contra Irán limita seriamente la capacidad del gobierno de Trump de imponer su voluntad a la república bolivariana de Venezuela.

Negociar hoy con la administración Trump no es lo mismo que hacerlo en enero de este mismo año. Entonces el portaaviones Gerald Ford parecía todopoderoso e invencible. Hoy es un buque que regresa renqueando a su base en Estados Unidos, después de que sus cañerías se atascaron por completo y después de que un misil enemigo causara un incendio a bordo que tardaron treinta horas en apagarlo. Estará fuera de servicio por meses o incluso por años.

Carlos Jiménez

Foto tomada de: BBC